

¿CÓMO ADMINISTRAR MONTADO EN LA ESTELA DEL CRECIMIENTO? LOS PROBLEMAS DE GOBERNAR SIN PLANES DE MEDIANO PLAZO

Santiago Pedraglio

Columnista de Perú 21, sociólogo y profesor del Diplomado de Gobernabilidad PUCP

A casi un año de la nueva gestión aprista, no se trata de pedirle al gobierno que se convierta en un régimen de centroizquierda; lo imprescindible es que sus responsables diseñen con urgencia propuestas de cambio de mediano plazo que, aun sin alterar el modelo macroeconómico, por lo menos fortalezcan institucionalmente al país y reduzcan de manera sustancial los porcentajes de pobreza.

1. El gobierno pierde la iniciativa de la agenda política

En sus primeros meses como nuevo presidente, Alan García no cesó de tener iniciativas que convocaban la atención mediática: impulso a la pena de muerte, críticas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, campaña contra las organizaciones no gubernamentales, entre otras. Este afán de copar la agenda y ofrecer “primicias” a los medios de comunicación concluyó cuando estallaron las denuncias por compras irregulares de patrulleros en el Ministerio del Interior y las críticas a licitaciones en Salud y Educación. La pendiente se acentuó con las denuncias contra congresistas alentadas por los diarios, y se inclinó en grado máximo a partir del escándalo de la frustrada elección, en el Congreso de la República, de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Este escándalo político forzó al presidente García a asistir, por iniciativa propia, a una reunión de la junta de portavoces del Parlamento.

Perder la capacidad de imponer la agenda pública equivale, en buena medida, a perder la iniciativa política acerca de lo que se discute en el país; y el desplazamiento comentado no se debe solo al esfuerzo de los medios por buscar noticias que impacten, sino también a errores de la “clase política”, y en particular al empanamiento en el que se encuentra el gobierno.

Baste como ejemplo el del Tribunal Constitucional: si el Ejecutivo y el Parlamento produjeron el lío que llevó a anular la elección fue porque, en lugar de preocuparse por los cambios que la institucionalidad democrática

requiere, el APRA tuvo como prioridad copar esta instancia con el fin de administrar crisis y vadear asuntos como la probable extradición de Alberto Fujimori e incluso un eventual intento de proponer la reelección.

Otro caso es el debilitamiento de la autonomía de los organismos reguladores, al cual se han opuesto abiertamente incluso sectores vinculados al mundo empresarial y a la derecha democrática. Si bien sería ingenuo encargarle a García su campaña electoral de centroizquierda ahora que se maneja como un presidente de centrodecha o de derecha, no deja de subvertir que gobierne con una voluntad tan conservadora que da prioridad al copamiento de espacios de poder antes que al fortalecimiento institucional del Estado —en este caso, a los organismos vinculados al mercado—.

2. Desconexiones: medios-gobierno, Lima-provincias y políticas gubernamentales-expectativas populares

Ni los medios de comunicación ni el gobierno han puesto en el centro de la agenda las reformas políticas que el país requiere. La principal responsabilidad es del gobierno, ciertamente, porque esa es su tarea central, plantear soluciones y resolver problemas nacionales. Sin embargo, este es muy sensible frente a la iniciativa de los medios porque teme que las persistentes denuncias lo debiliten. No hay, pues, entre los medios de comunicación y el gobierno, una disputa por programas alternativos, sino una reacción del gobierno ante el temor de resultar zaherido por denuncias de supuesta corrupción y abuso de poder.

Intereses divergentes se dan también entre Lima y el resto del país. No solo se trata de un recuerdo de los resultados de las elecciones presidenciales del año

Fuera de Lima hay agendas propias, con fuerzas en ebullición, con malestares y con protestas embalsadas.

pasado: fuera de Lima hay agendas propias, con fuerzas en ebullición, con malestares y con protestas embalsadas. En tiempos recientes, las protestas en zonas mineras como Casapalca –donde incluso hubo muertes– y Cajamarca –con la empresa Yanacocha–, o los paros regionales en Puno y Loreto, no han motivado tensión en el gobierno ni atención especial de los medios o de los actores políticos.

Aunque ahora último se lo ha visto viajar como si el país fuera la capital.

En este contexto, no sorprende que, de acuerdo con la última encuesta de Apoyo,¹ la aprobación de la gestión presidencial siga en descenso (42%) y la desaprobación en ascenso (49%). Únicamente en

Lima Alan García obtiene una aprobación que supera la mitad (55%); en el resto del país su aprobación ha tenido un brusco descenso, sobre todo en el sur (24%) y en el oriente (14%). En el norte logra 49% y en el centro 41%. Aunque ahora último se lo ha visto viajar con algo más de frecuencia para inaugurar obras o presentar alguna iniciativa, sigue gobernando como si el país fuera la capital... e incluso solo los distritos de la capital que están siendo beneficiados directamente por el crecimiento de la economía.

En cuanto a la cobertura mediática, suele suceder que cuando los medios informan sobre alguna protesta, no es su prioridad explicar las razones de esta sino hablar de las acciones producto de estas causas, sobre todo cuando hay bloqueos de carreteras o desmanes. Los porqués están perdidos en las últimas líneas de la nota periodística o simplemente no aparecen.

Una expresión de la falta de sintonía del gobierno central con las provincias es la ausencia de claridad en torno a la descentralización. Es cierto que el partido de gobierno es minoría entre los gobiernos regionales, pero, por otra parte, la gran mayoría de los presidentes de estas instancias subnacionales ha demostrado su voluntad de colaborar y negociar con el gobierno central. No está claro, sin embargo, quién conduce el proceso de descentralización y menos todavía el cronograma de transferencias de recursos y competencias. Más lejos todavía está la propuesta de reforma tributaria descentralizada.

Otra expresión de esta falta de sintonía entre los problemas de fondo y las políticas públicas se da en

torno al narcotráfico. El blanco principal siguen siendo los campesinos cocaleros y no así el creciente poder de los grupos o firmas de narcotraficantes. La desidia con la que se trata el asunto es preocupante. Se hace infinidad de declaraciones acerca de la seguridad –y las encuestas indican la clara preocupación ciudadana al respecto–, pero el gobierno no se decide a asumir la lucha contra el narcotráfico como un asunto central de la política estatal. Esto exigiría, por ejemplo, nombrar una cabeza política e institucional que la dirija y trazar políticas complementarias que impidan que este mal siga contaminando las estructuras del Estado y de la economía nacional. Las rutas del narcotráfico atraviesan hoy, por vía terrestre, desde los valles de los ríos Apurímac y Ene o desde el Alto Huallaga hasta casi todos los puertos principales, intermedios y menores de la costa. La red ilegal ha crecido y la contaminación del Estado también.

El escepticismo de amplios sectores de la población, que se expresa en las encuestas, tiene como punto de partida la percepción de que los grandes problemas del país no están siendo resueltos: el gobierno no sabe cómo enfrentarlos ni da muestras de esforzarse por encontrar las soluciones.

3. Conflictos intraoficialistas y ausencia opositora

Las pugnas en el APRA han crecido y son diversas: el presidente Alan García se siente incómodo con el creciente protagonismo del premier Jorge del Castillo; la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, y el premier Jorge del Castillo tienen una pugna pública por el liderazgo y la sucesión en su partido; sectores apristas de base o de mando intermedio se sienten alejados del poder, poco partícipes del gobierno; Agustín Mantilla presiona por presencia y reconocimiento, y no está claro el vínculo que mantiene con sectores no solo del APRA sino que están dentro del gobierno. Mientras tanto, el presidente parece sentirse incómodo con su partido; por ejemplo, rara vez aparece como su dirigente, aunque, contradictoriamente, la gente lo sigue vinculando a su organización política de manera indisoluble.

El presidente parece sentirse incómodo con su partido; rara vez aparece como su dirigente, aunque, la gente lo sigue vinculando a su organización.

Los núcleos de poder en el gobierno son diversos y constantemente se producen conflictos. Si bien esto es

¹ El Comercio, 24 de junio de 2007.

inevitable en cualquier administración u organización, lo preocupante es que, al no haber un plan de reformas –que tienen un amplio consenso entre distintos sectores políticos–, los conflictos pueden terminar creciendo y convirtiéndose en un grave factor de disociación. El gobierno aprista, más que temerle a la oposición, debe preocuparse por sus propias filas. Las manifestaciones de ingobernabilidad están siendo con frecuencia un producto directo de las desavenencias intrapartidarias.

Por otro lado, no se pueden pasar por alto los conflictos que existen al interior del gabinete, como aquellos en torno a la política laboral, entre el sector Trabajo y el de la Producción; en torno a las políticas cocaleras, entre el ex ministro de Agricultura, el premier y el ministro del Interior; y entre ciertas iniciativas de la Comisión de Defensa del Congreso y las propuestas del Ministerio de Defensa.

La oposición política sigue sin adquirir peso alguno. El Partido Nacionalista y Unión por el Perú (UPP) están definitivamente divididos; además, la UPP presenta subdivisiones internas y el APRA tiene posibilidades de pescar en esa convulsionada pecera. Unidad Nacional no solo ha sufrido el desmembramiento de Renovación Nacional sino que la sanción a sus congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola la ha dejado prácticamente sin iniciativa. Al fujimorismo solo le preocupa salvar a su jefe máximo de la extradición y de una pena carcelaria prolongada. En este contexto, es contradictorio que un parlamentario de una agrupación tan pequeña como Acción Popular, Yonhy Lescano, adquiera protagonismo en importantes casos como la defensa del consumidor, las reguladoras y la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

La posible extradición de Alberto Fujimori no tiene por qué perjudicar al gobierno aprista –ni a Alan García–, salvo que sus miembros se quieran involucrar de manera muy evidente a favor del ex mandatario. De lo contrario, si el gobierno y el APRA mantienen una neutralidad –por lo menos aparente– y la saben administrar mediáticamente, el efecto será mínimo. Sin duda, la eventual presencia de Fujimori generará una gran

convocatoria mediática y robará cámaras al presidente y a los funcionarios del Estado, pero no hay razón para pensar que afectará la gobernabilidad ni la aprobación de los actuales gobernantes. Dicho esto al margen de que el gobierno y el propio presidente seguramente preferirían que Fujimori no volviera.

La posible extradición de Alberto Fujimori no tiene por qué perjudicar al gobierno, si el gobierno y el APRA mantienen una neutralidad.

4. Tratado de Libre Comercio, Chile y otros avatares internacionales

Según los voceros del gobierno, el TLC con Estados Unidos tiene posibilidades de ser ratificado por el Congreso norteamericano. Sin embargo, todavía no se conocen con la exactitud suficiente las modificaciones propuestas por este ni la opinión del gobierno peruano en torno a ellas, aunque es fácil predecir que las aceptará todas o casi todas. En el ínterin, la opinión pública se ha volcado a favor del TLC y las manifestaciones de resistencia a su firma se han diluido o han sido minimizadas.

La Comunidad Andina está prácticamente dividida por las conocidas diferencias entre los gobiernos del Perú y de Colombia, por un lado, y los del Ecuador y Bolivia, por el otro. La posible negociación de un TLC con la Unión Europea sigue siendo, en estas condiciones, una gran interrogante.

El vínculo con Chile es el más activo que el Perú mantiene con sus vecinos, pero también el más sensible y conflictivo. La balanza comercial entre ambos países se ha incrementado, pero los volúmenes de inversión directa desde Chile en el Perú son inmensamente superiores que los que el Perú tiene en el país sureño. Por otro lado, los diferendos por la limitación marítima seguirán acompañando durante años las relaciones entre ambos países y las posibilidades de llegar a acuerdos bilaterales sobre el punto son inexistentes. El Perú está obligado a ir a la Corte Internacional de La Haya y no es seguro que el punto de vista nacional triunfe. ■